



EXPEDIENTE N° 218-10-2021-DEN

RESOLUCIÓN N° 311-2022

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES, DIRECCIÓN NACIONAL. San José a las 08:30 horas del 15 de julio de 2022. Conoce la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes denuncia formulada por [NOMBRE 1] contra la **SECCIÓN DE DACTILOSCOPIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

RESULTANDO

1. Que mediante escrito presentado en esta Agencia en fecha 01 de octubre de 2021, el señor [NOMBRE 1] presentó formal denuncia contra la **SECCIÓN DE DACTILOSCOPIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA** (en adelante Dactiloscopia), cuya pretensión es: *“(...) solicito con todo respeto se declare con lugar mi denuncia, y se elimine de la Base de Datos de la Sección de Dactiloscopia del Ministerio de Seguridad Pública los informes policiales N°91314-18, 91247-178 y el 1056-18, los cuales están a mi nombre”.* (Visible a folios 01 al 14 del Expediente Administrativo).
2. Que mediante resolución N° **548-2021** de las 08:00 horas del 09 de noviembre de 2021, se admite la denuncia y se ordena el traslado de cargos al denunciado, a fin de que brinde el informe respectivo, con relación a las faltas que se le atribuyen en grado de presunción. Dicha resolución es notificada al denunciado en fecha 07 de enero de 2022. (Visible a folios 15 y 19 del Expediente Administrativo).
3. Que, mediante documento remitido a esta Agencia, vía correo electrónico, en fecha 10 de enero de 2022, suscrito por el señor [NOMBRE 2], en su calidad de jefe Sección de Dactiloscopia, Departamento de Inteligencia Policial, del Ministerio de Seguridad Pública, cumpliendo así en tiempo y forma con lo prevenido mediante resolución N°**548-2021** supra indicada. (Visible a folios 21 al 26 del Expediente Administrativo).
4. Que se han analizado los aspectos de forma y fondo de este expediente, se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente Resolución Administrativa.

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS: Concluido el análisis de la denuncia presentada y los autos del expediente, de relevancia para la resolución del presente asunto se consideran probados los siguientes hechos:

- 1- Que mediante escrito presentado en esta Agencia en fecha 01 de octubre de 2021, el señor [NOMBRE 1] presentó formal denuncia contra la **SECCIÓN DE DACTILOSCOPIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA** (en adelante Dactiloscopia), cuya pretensión es: *“(...) solicito con todo respeto se declare con lugar mi denuncia, y se elimine de la Base de Datos de la Sección de Dactiloscopia del Ministerio de Seguridad Pública los informes policiales*



N°91314-18, 91247-178 y el 1056-18, los cuales están a mi nombre”. (Visible a folios 01 al 14 del Expediente Administrativo).

2- Que existen en la base de datos del denunciado los partes policiales [NÚMERO 1], [NÚMERO 2] y [NÚMERO 3] por aparente decomiso de droga. (Visible a folio 21 del Expediente Administrativo).

3- Que en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de Limón no existen causas activas a nombre del señor [NOMBRE 1]. (Visible a folio 05 del Expediente Administrativo).

4- Que en fecha 27 de octubre de 2020, el señor [NOMBRE 1] solicitó al denunciado la eliminación de los partes policiales [NÚMERO 1], [NÚMERO 2] y [NÚMERO 3]. (Visible a folio 06 del Expediente Administrativo).

5- Que el señor [NOMBRE 1] presentó en fecha 27 de noviembre de 2021 ante Dactiloscopia un formulario para ejercer el derecho de rectificación y/o supresión de datos personales. (Visible a folios 07 al 10 del Expediente Administrativo).

II. HECHOS NO PROBADOS: Ninguno de relevancia para la resolución del presente asunto.

III. SOBRE EL FONDO DE LA PRESENTE DENUNCIA: Señala el señor [NOMBRE 1] en su denuncia que, que la Sección de Dactiloscopia del Ministerio de Seguridad, lo mantiene registrado en sus bases de datos, en razón de tres partes policiales por tenencia y consumo de drogas, sin embargo, no existe causa abierta ni antecedentes judiciales activos. Indica que no ha sido juzgado por las autoridades judiciales competentes. Manifiesta que por esta razón solicitó se eliminaran los mencionados partes, sin embargo el denunciado le informó que la vigencia de esos datos en sus bases es por 10 años, lo cual a su parecer no tiene proporcionalidad ya que señala que la Ley de Registro y Archivos Judiciales N°6723 en su artículo 11 establece que los asientos judiciales se cancelaran luego de cumplida la pena, cuando la misma es inferior a tres años, que en su caso, reitera no fue juzgado por un delito, ni siquiera se dio una pena, o sea que a diferencia de los procesos judiciales, no se le han otorgado garantías jurídicas, y más bien, se violentan derechos constitucionales, no siendo válido que la misma administración violente principios constitucionales, como la seguridad jurídica y el principio de legalidad, para crear registros policiales en situaciones no tipificadas en una ley, y con fundamento en lo anterior se le niega el permiso de portación de armas; en razón de lo expuesto, solicita la eliminación de la base de datos de la Sección de Dactiloscopia los informes policiales [NÚMERO 1], [NÚMERO 2] y [NÚMERO 3].

Por su parte, la Dirección Jurídica de dicho Ministerio, acepta en su informe que los partes que pretende el denunciante sean eliminados existen y sostiene el mismo argumento, mediante oficio N° MSP-DM-AJ-SPJA-5373-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por [NOMBRE 3] en su condición de Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad, indica que no existe un derecho de rango constitucional a la portación y tenencia de armas de fuego, y que ese ministerio se fundamenta en los pronunciamientos de la Sala Constitucional y directrices internas, los que coinciden que para los registros policiales que carecen de una acción judicial se eliminaran de conformidad con la prescripción ordinaria de Ley, sea la de 10 años, además se indica que la Sala Constitucional establece que el Estado debe de garantizarse para las investigaciones la



individualización de los responsables de las conductas delictivas, para lo que debe de contar con medios y que las reseñas de las personas así lo permiten, lo cual se debe de realizar en el marco de la garantía y respeto de los derechos de las personas, que las reseñas tienen efectos informativos, pero que son estrictamente confidenciales; además se adjunta documento en el cual se establece que los antecedentes policiales se mantendrán por 10 años en las bases de datos de esa entidad.

De previo a analizar el fondo del presente asunto, es importante aclarar que, en la presente resolución, esta Agencia no entrará a valorar, por no ser de su competencia, la forma, el procedimiento o los requisitos que debe cumplir determinada persona para obtener un permiso de portación de armas, si no, que se analizará la legalidad, pertinencia y razonabilidad de los hechos denunciados, a la luz de los principios rigen la materia de protección de datos personales, consagrados en la Ley N° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y al bloque de legalidad que regula el proceder legal de la propia Administración Pública. Importante es traer a colación que tratándose de la Administración, la misma se rige por el denominado “principio de legalidad”, el cual efectivamente indica que los funcionarios públicos, son simples depositarios de la autoridad (artículo 11 de la Constitución Política), por lo que, la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes, (Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública); en ese sentido debe de señalarse que la Sección de Dactiloscopia del Ministerio de Seguridad, no cuenta con una norma expresa que la habilite para mantener en una base de datos, información de índole personal de los ciudadano por 10 años, lo cual, se señala en el informe, remitido bajo fe de juramento, mediante oficio N° MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-DIP-SD-0527-2022, del 18 de febrero de 2022, siendo que indica el Sub-Intendente [NOMBRE 2], que el fundamento de esa dependencia para mantener los datos personales, son los pronunciamientos de la Sala Constitucional y directrices internas, en este sentido debe traerse a colación que el ordenamiento jurídico es una unidad constituida dinámica, que coexiste y es modula por una serie de diferentes fuentes del derecho, por lo que, lo procedente, es que se valore como un todo, de conformidad con el principio de jerarquía de las normas (artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública); verbigracia, no se podría establecer acciones que perjudican directamente a los administrados; ahora bien, al mantener una anotación como la que está en discusión, sería desproporcionado, ante lo regulado para los registros judiciales; véase que la Ley N° 8968, establece garantías y principios que regulan el manejo y tratamiento de los datos personales, y que deben de prevalecer en resguardo del derecho de autodeterminación informativa de los ciudadanos, así se puede interpretar de los artículos: “**Artículo 6.- Principio de calidad de la información:** *Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados. 1.- Actualidad. Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos personales que puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular. 2. Veracidad. Los datos de carácter personal deberán ser veraces. La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o*



suprimir los datos que falten a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de manera leal y lícita. 3.- Exactitud. Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificadas. Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable de la base de datos, por los correspondientes datos rectificadas, actualizados o complementados. Igualmente, serán eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su recolección. 4.- Adecuación al fin. Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley. Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública.”

Además, es de relevancia indicar lo establecido en el **Artículo 7.- Derechos que le asisten a la persona:** *Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos. La persona responsable de la base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona, de manera gratuita, y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud. (...)*

2.- Derecho de rectificación. *Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y su actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos, o hayan sido recopilados sin autorización del titular. Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos, la rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales. Por otra parte, de conformidad con Ley del Registro y Archivos Judiciales, el artículo 11 establece que, para eliminación de la información ahí consignada, registrarán las siguientes reglas: “**Artículo 11.-** El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros: a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. b) Un año después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años. c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y diez años. d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de diez años en adelante. e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, según el artículo 2 de la Ley N.º 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, según los términos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública. Si la solicitud de certificación de juzgamientos se hace para fines laborales, de conformidad con los incisos e) y ñ) del artículo 13 de esta ley, el Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial*



únicamente consignará en dicha certificación las existencias de los juzgamientos referidos en el inciso e) del presente artículo”, en ese sentido, es importante analizar los principios de razonabilidad y proporcionalidad de conformidad con la jurisprudencia constitucional: “...De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad.” La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la “razonabilidad” al lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: **legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto**, ideas que desarrolla afirmando que ya han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia constitucional: “... **La legitimidad** se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; **la idoneidad** indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; **la necesidad** significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y **la proporcionalidad en sentido estricto** dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea “exigible” al individuo ...” (**Sentencia de esta Sala número 03933-98, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho**). En ese sentido, véase que la ley de Archivos Judiciales, establece plazos claramente definidos para la eliminación de la información de penas, acaecidas sobre una persona en razón de una sentencia judicial, lo cual resulta legítimo, idóneo, necesario y proporcional, según el tipo de delito que se haya cometido y su respectiva sanción penal. Para citar un ejemplo, véase que el inciso a, del artículo 11 antes transcrito, señala que para delitos cuya pena sea menor a 3 años, el registro debe de eliminarse de forma inmediata una vez cumplida la pena. Ahora bien, siguiendo este análisis de proporcionalidad, se tiene que no existe norma de rango legal, que indique, que tipo de información y el plazo por el cual, debe ser mantenida la información del Archivo Policial, lo cual sin duda deja desprotegidos a las personas que se han sido registradas en dicho archivo, sin que el motivo que generó el parte policial, haya sido elevado a la autoridad judicial y exponiendo datos de índole personal, toda vez que los mismos son usados, como referencia para aprobar o no permisos de portación de armas, lo cual es comunicado a empresas de seguridad que tienen que ser informadas en razón de ser patronos de los solicitantes del permiso. Es aquí, donde esa anotación, se vuelve una pena o sanción encubierta, pero con efectos desproporcionados, toda vez, que si para la vía judicial, cuando se genera una pena luego de todo



un proceso judicial, existe un plazo de ley para su mantenimiento en la base de datos, en la que la persona fue juzgada por una autoridad competente y contando con el derecho de defensa y otras garantías, se le encontró culpable, y cumplió una pena, posterior a ello, se elimina su reseña, con mucha más razón, debería existir un plazo, para que los partes policiales sean mantenidos en el archivo correspondiente, caso contrario se estaría hablando de una especie de sanción si límite de tiempo, lo cual evidentemente está vedado por nuestra constitución política. En ese sentido, obsérvese que el derecho de autodeterminación informativa, regulado en el artículo 4 de la ley N° 8968, tiene el rango de derecho fundamental, y en ese sentido, las acciones que se lleven a cabo por las autoridades en el resguardo de la información, debe estar sujeta a plazos razonables y proporcionales, lo cual no resulta de esa forma, si para un parte policial una persona debe de esperar el plazo máximo de prescripción que son 10 años. Los motivos por los cuales el hecho registrado en el parte policial no fue elevado a las autoridades judiciales, no debería ser una carga para el administrado, quien, bajo el principio de inocencia consagrado también a nivel constitucional, no puede ser limitado en el ejercicio de sus demás derechos, salvo cuando se haya determinado por autoridad judicial competente que efectivamente cometió un delito. En otras palabras, siendo que no existe norma de nivel legal que le permita al Archivo Policial mantener el registro de los partes policiales, la decisión de sede administrativa de mantenerlo por 10 años, resulta, bajo lo expuesto desproporcional; adicionalmente nótese las fechas de la jurisprudencia indicada el informe rendido por el Archivo Policial, dado que la mayoría son anteriores a la promulgación de la Ley No. 8968. En ese sentido, siendo que, en aplicación del principio de actualidad de la información, toda aquella información haya dejado de ser de ser pertinente o necesaria, en razón de la finalidad para la cual fue recibida y registrada, deberá ser eliminada de la base de datos correspondiente, lo procedente es declarar con lugar la presente denuncia. Cabe resaltar que debe analizarse institucionalmente, el fin de la información que se recolecta en el Archivo Policial, en función de los usos que se le da a esos datos personales, para que cumpla con los principios, derechos, protocolos de actuación y medidas de seguridad acordes y actualizados en los últimos 12 meses, que establece la Ley 8968; adicionalmente debe clarificarse respecto a la fundamentación para la transferencia y todos los aspectos de recopilación, uso y acceso inherentes en ésta, con el fin de salvaguardar el fin de investigación criminal, garantizar la eficiencia de los cuerpos de policía y de la seguridad en términos generales, pero siempre en cumplimiento del marco normativo de forma íntegra, manteniendo así información actual, veraz, exacta y adecuada al fin; otro punto a revisar son los mecanismos para el ejercicio de los derechos que le asisten al habitante, tanto en procedimiento como en formatos, siendo que el reporte visible a folio 12, no reúne las condiciones de información necesarias para el acceso pleno a su información, así como al derecho de rectificación; por lo anterior se dispone el comunicado de la presente resolución al Director General de la Fuerza Pública con el fin de que se realice solicitado, esto en apego a los apartados a), c), e) del artículo 16 de la Ley 8968 y como actos previos a accionar bajo los apartado d) y g) de ese mismo numeral.

POR TANTO
LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LOS HABITANTES
RESUELVE



1- Declara con lugar la denuncia presentada por [NOMBRE 1] contra de la **SECCIÓN DE DACTILOSCOPIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA** y se ordena la supresión de la información solicitada por el denunciante para efectos de terceros. Lo anterior, deberá realizarse y comunicarse tanto al denunciante como a esta Agencia, en un plazo de **CINCO DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la notificación de la presente denuncia.

2- Se **EXHORTA** al **Director General de la Fuerza Pública**, para que se proceda a ordenar un análisis del fin legal de la información que se recolecta en el Archivo Policial, en función de los usos que se le da a esos datos personales, para que se cumpla con los principios, derechos, protocolos de actuación y medidas de seguridad acordes y actualizados en los últimos 12 meses, que establece la Ley 8968; sobre la fundamentación para la transferencia y todos los aspectos de recopilación, uso y acceso inherentes en ésta, con el fin de salvaguardar el fin de investigación criminal, garantizar la eficiencia de los cuerpos de policía y de la seguridad en términos generales del Archivo Policial, pero siempre en cumplimiento del marco normativo de forma integral, manteniendo así información actual, veraz, exacta y adecuada al fin; lo solicitado debe incluir la revisión de los mecanismos para el ejercicio de los derechos que le asisten al habitante, tanto en procedimiento como en formatos, para lo cual se otorga un plazo de **10 DÍAS HÁBILES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO**, para que en un plazo no mayor a **SEIS MESES** el **ARCHIVO POLICIAL**, presente actualizados los protocolos mínimos regulados en los artículos 12 de la Ley No. 8968 y 32 y siguientes de su reglamento, acorde a lo establecido en la presente resolución y que se genere el procedimiento para la actualización de los mismos anualmente. Dichos protocolos deberán demostrar que mantiene un programa de capacitación a los funcionarios intervinientes en la materia de protección de datos personales.

3- En caso de incumplimiento la Agencia podrá ordenar la apertura del **PROCEDIMIENTO ORDINARIO**, de conformidad con el numeral 27 de la ley No. 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, para la aplicación de la sanción correspondiente.

4- De conformidad con el artículo 27 de la ley No. 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, contra esta resolución cabe únicamente el recurso de revocatoria, el cual deberá ser presentado en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución. **NOTIFIQUESE.**

Licda. Wendy Rivera Román
Directora Nacional
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes